OFICIO No.	CEDH/P/CUL/001109
EXPEDIENTE No.:	CEDH/VZS/III/054/10
QUEJOSA:	N1
AGRAVIADO:	N2
RESOLUCIÓN:	ACUERDO DE CONCILIACIÓN No. 1/2012

LIC. MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZ,
Procurador General de Justicia del Estado,
Ciudad.

Por el presente expreso a usted que con fecha 23 de abril de 2010, la señora N1 presentó escrito de queja ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos por actos presuntamente transgresores de los derechos humanos cometidos en perjuicio del señor N2, mismos que atribuyó a elementos de la Policía Ministerial del Estado.

En su escrito de queja, señaló que su esposo N2 se encontraba interno en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, acusado del delito de homicidio.

Argumentó que el 17 de abril de 2010, su esposo se encontraba en su centro de trabajo en Mazatlán, Sinaloa, hasta donde llegaron elementos de la Policía Ministerial del Estado, quienes sin motivo alguno lo detuvieron y lo llevaron a las instalaciones de dicha corporación, lugar en donde refirió fue vendado de los ojos y golpeado, al grado de que al día de la presentación de la queja todavía contaba con huellas de violencia, tanto en sus piernas como en el resto de su cuerpo.

Los actos motivo de la queja fueron calificados como presuntamente transgresores de derechos humanos, razón por la cual en términos de lo que

dispone el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se inició la investigación respectiva quedando registrada en la Visitaduría Regional Zona Sur de este organismo bajo el expediente anotado al rubro, en el cual se practicaron las siguientes diligencias:

1. Acta circunstanciada de fecha 23 de abril de 2010, mediante la cual personal de este organismo hizo constar que se trasladó a las instalaciones que ocupa el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, lugar en el que se entrevistó con el señor N2.

En dicha diligencia se le informó respecto de la queja presentada por su esposa, mismo que manifestó encontrarse de acuerdo con la misma, acto en el cual se hizo constar las lesiones que presentaba en su economía corporal.

Por último, quedó asentado en dicha diligencia que el señor N2 narró a personal de este organismo las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que ocurrieron los hechos motivo de la queja.

Durante dicha entrevista, personal de esta Comisión hizo constar las lesiones que a simple vista observó en la superficie corporal del señor N2, encontrando lesiones en el dorso de ambas manos, en región lumbar izquierda de la espalda y en la cara externa del muslo derecho, las cuales son del tipo de excoriaciones en forma de puntillero hemorrágico en proceso de costrificación, tomándole 15 placas fotografías de las mismas para mayor ilustración.

2. Oficio número CEDH/VZS/MAZ/000404 de fecha 27 de abril de 2010, por medio del cual se solicitó al Comandante de la Policía Ministerial del Estado con base en Mazatlán rindiera el informe de ley respecto de los hechos motivo de la queja.

3. Oficio número CEDH/VZS/MAZ/000405 de fecha 27 de abril de 2010, mediante el cual se solicitó al titular de la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en Homicidio Doloso de Mazatlán rindiera el informe de ley respecto de los actos motivo de la queja.

4. Oficio número CEDH/VZS/MAZ/000408 de fecha 28 de abril de 2010, por el cual se notificó a la quejosa el inicio del presente expediente de queja, mismo en el cual se acordó iniciar la investigación respectiva por considerar que los hechos puestos en conocimiento de este organismo pudieran ser violatorios de derechos humanos.

5. Escrito recibido ante este organismo el 4 de mayo de 2010, suscrito por la señora N1, mediante el cual solicitó copia del presente expediente de queja.

6. En esa misma fecha, mediante oficio número CEDH/VZS/MAZ/000428, se solicitó al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán rindiera un informe en vía de colaboración respecto de los actos reclamados por la quejosa.

7. Con oficio número 3205/2010, recibido ante este organismo el 5 de mayo de 2010, el titular de la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en Homicidio Doloso de Mazatlán rindió el informe de ley solicitado mediante oficio número CEDH/VZS/MAZ/000405.

En dicho informe manifestó que el 17 de abril de 2010 quedó registrada en la agencia a su cargo la averiguación previa número MAZTL/****/**/**** por la comisión del delito de homicidio doloso.

Asimismo, señaló las diligencias practicadas dentro de la citada indagatoria penal, entre las que destacan la declaración ministerial del agraviado el 18 de abril del mismo año, que posteriormente se ordenó la detención de éste, misma que fue ejecutada por agentes adscritos a la Unidad Modelo de Investigación

Policia de la Policia Ministerial del Estado y finalmente se ejercitó acción penal en contra del agraviado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán.

Manifestó que ordenó la detención de éste en estricto apego a lo establecido por el artículo 117 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa y que rindió la declaración ministerial ante la representación social, negando que éste hubiere estado incomunicado, además señaló que en todo momento estuvo acompañado del defensor de oficio y de dos testigos de asistencia.

Además mencionó el nombre de los agentes de la Policía Ministerial del Estado que participaron en la detención del agraviado, señalando que durante la declaración ministerial de éste, no se observó a simple vista huellas de lesiones en su integridad corporal por parte de la agente auxiliar del Ministerio Público que llevó a cabo dicha diligencia.

Por último, señaló que en la fecha en que fue detenido el agraviado se le practicó dictamen médico psicofísico por parte de peritos oficiales, en donde se concluyó que éste no contaba con lesiones que dictaminar.

A fin de corroborar su dicho remitió copia simple del dictamen pericial con número de folio 6167 de fecha 18 de abril de 2010, emitido por peritos médicos del Departamento de Servicios Periciales, quienes determinaron que el señor N2 no presentaba lesiones que dictaminar.

7. Acuerdo de 7 de mayo de 2010, mediante el cual se resolvió en sentido negativo la solicitud realizada por la quejosa mediante escrito de fecha 4 de mayo del presente año, negando la expedición de copias de las diligencias que componen el presente expediente.

8. Acta circunstanciada de fecha 7 de mayo de 2010, mediante la cual personal de este organismo hizo constar que se realizó llamada al número proporcionado por la quejosa en su escrito de queja sin obtener respuesta.

9. Oficio número 2192/2010 recibido ante este organismo el 12 de mayo de 2010, por el cual el Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, rindió el informe solicitado en vía de colaboración por parte de personal de este organismo.

En dicho informe manifestó que el agraviado fue examinado por un doctor adscrito al departamento médico de ese centro de reclusión y que el diagnóstico arrojó que presentaba pequeñas excoriaciones en mano derecha, en oído derecho se encontró hipoacusia, con conducto auditivo con zona hemorrágicas y edematizado al igual que pabellón auricular, además de múltiples excoriaciones dérmicas imperliginizadas en muslo derecho, remitiendo copia certificada del dictamen correspondiente.

10. Oficio número CEDH/VZS/MAZ/000446 de fecha 12 de mayo de 2010, por medio del cual se requirió al Comandante de la Policía Ministerial del Estado con base en Mazatlán respecto del informe previamente solicitado mediante el diverso CEDH/VZS/MAZ/000404.

11. Oficio número CEDH/VZS/MAZ/000458 de fecha 17 de mayo de 2010, mediante el cual se solicitó al Coordinador General de la Unidad Modelo de Investigación Policial rindiera un informe de ley respecto de los hechos motivo de la queja.

12. Acta circunstanciada de fecha 20 de mayo de 2010, por la cual personal de este organismo hizo constar llamada telefónica al número proporcionado por la quejosa en su escrito de queja sin obtener respuesta.

13. Oficio número 00664 recibido ante este organismo vía fax el 4 de junio de 2010, mediante el cual el Coordinador General de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa informó que procedieron a la detención del agraviado y otra persona en cumplimiento a la orden de detención girada por el agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en Homicidio Doloso de Mazatlán, siendo trasladado de inmediato a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado en Mazatlán para ser puesto a disposición del Ministerio Público que lo requería.

Por último, señaló que los elementos que participaron en la detención del agraviado y en el traslado de éste hasta el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, fueron los agentes N3 y N4, ambos adscritos a la Unidad Modelo de Investigación Policial.

Para soportar su dicho, el citado funcionario anexó a su informe copia simple de la orden de localización y detención girada por el representante social, informe policial mediante el cual pusieron a disposición al agraviado junto con otra persona y del parte informativo rendido por los elementos aprehensores.

Cabe hacer notar que el referido parte informativo también es firmado por los agentes N5 y N6, agentes de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la base de Mazatlán, Sinaloa.

14. Acta circunstanciada de fecha 10 de junio de 2010, mediante la cual personal de este organismo hizo constar que se realizó llamada al número proporcionado por la quejosa en su escrito de queja sin obtener respuesta.

15. Acta circunstanciada de fecha 28 de junio de 2010, mediante la cual personal de esta Comisión hizo constar que se recibió vía correo electrónico petición que formula N7 relacionada con el presente expediente.

16. Acta circunstanciada de fecha 29 de junio de 2010, mediante la cual personal de esta CEDH hizo constar que realizó llamada a la quejosa a quien se le hizo saber de la solicitud de información vía correo electrónico recibida en el correo oficial de este organismo, quien refirió que el correo corresponde al de su hermana N7 y que no autorizaba se enviara ninguna información a dicho correo electrónico, que cualquier dato que necesitara ella se comunicaría con personal de esta Comisión.

En dicho acto también se le informó que se acordó en sentido negativo la solicitud realizada por ella mediante escrito de fecha 4 de mayo de 2010, negando la expedición de copias de las diligencias que componen el presente expediente.

17. Acta circunstanciada de fecha 2 de julio de 2010, mediante la cual personal de este organismo hizo constar que realizó llamada telefónica al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, entablando comunicación con la Jefa del Departamento Jurídico Criminológico de dicho centro penitenciario, quien informó que la causa penal dentro de la cual está siendo procesado el agraviado lo es la ***/2010 se encuentra radicada en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa.

18. Oficio número CEDH/VZS/MAZ/000633 de fecha 2 de julio de 2010, mediante el cual se solicitó al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, remitiera copia certificada de las diligencias de la averiguación previa número MAZTL/***/***/**** que obran agregadas a la causa penal número ***/2010 del índice de ese Juzgado.

19. Oficio número 3379/10 recibido ante este organismo el 15 de julio de 2010, mediante el cual el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, remitió copias certificadas de las constancias solicitadas en el punto que antecede.

Ahora bien, de las diligencias practicadas dentro de la averiguación previa supra citada, por su importancia resulta necesario mencionar las siguientes:

a) Acuerdo de inicio de averiguación previa de fecha 17 de abril de 2010, con motivo del aviso recibido por medio del sistema de radiocomunicación C-4, mediante el cual informaron que en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se encontraba expuesto el cuerpo sin vida de un menor el cual al parecer habría fallecido a consecuencia de lesiones producidas por golpes.

b) Acta de fe ministerial del cadáver realizada a las 16:00 horas del 17 de abril de 2010.

c) Comparecencia de identificación legal de cadáver a las 22:20 horas del 17 de abril de 2010.

d) Informe policial de fecha 17 de abril de 2010, suscrito por los CC. N3 y N4, ambos elementos adscritos a la Unidad Modelo de Investigación Policial integrantes del grupo águila en la zona sur.

En dicho informe policial los agentes señalan fundamentalmente que atendiendo a la solicitud de investigación de parte del representante social, siendo aproximadamente las 19:00 horas del 17 de abril de 2010, se entrevistaron con los CC. N8 y N2, presuntos responsables dentro de la averiguación previa número MAZTL/****/****/****, quienes se encontraban en las celdas de la Policía Ministerial del Estado de Mazatlán, Sinaloa, personas que presuntamente narraron a los agentes la forma en cómo sucedieron los hechos que se investigan.

e) Oficio número 1651/2010, suscrito por el Comandante de la Policía Ministerial del Estado con base de Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual puso a disposición en calidad de presentados a los CC. N8 y N2 y remitió parte informativo suscrito por los agentes N9 y N6, ambos agentes de la Policía Ministerial del Estado, quienes narran sustancialmente haberse entrevistado con la madre del menor occiso (N8) en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente con el agraviado a quien localizaron en su centro de trabajo, procediendo a poner a éstos en calidad de presentados ante el representante social.

Debe precisarse que al ponerlos a disposición en calidad de presentados se practicó un examen clínico por parte del médico adscrito a la Policía Ministerial del Estado quien concluyó que el agraviado presentaba escoriaciones dermoepidérmicas sobre región lumbar izquierda, en tercio medio de su cara posterior del antebrazo derecho y sobre las muñecas de ambos antebrazos, dicho examen fue practicado a las 22:30 del 17 de abril de 2010.

f) Declaración ministerial de N8, rendida ante la representación social a las 02:05 horas del 18 de abril de 2010.

g) Declaración ministerial del agraviado N2, rendida ante la representación social a las 04:10 horas del 18 de abril de 2010.

h) Fe ministerial de fecha 18 de abril de 2010, mediante la cual el representante social del fuero común dio fe, inspección y descripción ministerial de que a las 06:10 horas, en esos momentos se retiraron por sus propios medios de la agencia ministerial los indiciados N8 y N2, ello después de haber rendido su declaración ministerial en calidad de acusados.

l) Acuerdo de detención de fecha 18 de abril de 2010, mediante el cual a las 08:10 horas del mismo día, el representante social ordenó la detención de N8 y N2.

j) Oficio número 00423/2010 de fecha 18 de abril de 2010, por medio del cual el Coordinador General de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa puso a disposición del representante social del fuero común Especializado en Homicidios Dolosos de Mazatlán, Sinaloa, en calidad de detenidos a los CC. N8 y N2, manteniéndolos en las celdas de la Policía Ministerial del Estado, quienes señala fueron detenidos a las 08:50 del mismo día, según informe policial que anexa, el cual firman los agentes N3 y N4, ambos adscritos a la Unidad Modelo de Investigación Policial y los agentes N5 y N6, agentes de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la base de Mazatlán, Sinaloa.

k) Dictamen médico de fecha 18 de abril de 2010, practicado a las 16:35 horas, por 2 (dos) peritos médicos legistas adscritos a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Zona Sur, quienes al practicar una revisión al agraviado N2 concluyen que éste no presenta lesiones que dictaminar.

l. Resolución de fecha 20 de abril de 2010, mediante la cual se ejercita acción penal en contra de N2, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja (producido por golpes) y se ordena la libertad con las reservas de ley de la señora N8.

20. Opinión médica emitida el 11 de agosto de 2011, por el médico asesor que presta sus servicios de apoyo para esta Comisión Estatal.

Con lo anterior se evidencia entonces la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal del agraviado, además de la indebida prestación

del servicio público por parte de agentes de la Policía Ministerial del Estado que detuvieron y presentaron al agraviado.

Para esta CEDH es necesario señalar la importancia que reviste en nuestra entidad la reforma al artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 26 de mayo de 2008.

En esta reforma se establece que el fundamento y objetivo último del Estado de Sinaloa es la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes.

En este sentido nuestra Constitución local exige a todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley como parte integrante del gobierno y por ende del Estado de Sinaloa, que su actuación no debe encontrarse limitada solamente al respeto de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y tratados internacionales, lo que implica una conducta pasiva, sino que además demanda de éstos una actuación activa al establecer que su fundamento y objetivo último es proteger la dignidad humana, lo que conlleva que dichos servidores públicos están obligados durante el ejercicio de sus funciones a realizar acciones orientadas a garantizar a toda persona en territorio sinaloense el debido goce y ejercicio de los derechos humanos.

En esta tesitura y a la luz de la reforma mencionada, se instauró a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como agentes garantes de los derechos humanos de las personas en territorio sinaloense; es decir, están ineludiblemente obligados a garantizar y respetar entre otros el derecho humano a la integridad y seguridad personal de toda persona en su carácter de imputada durante la investigación de algún presunto delito.

Es así que dichos servidores públicos deben abstenerse de emitir sin causa justificada actos que hagan sufrir a la persona transformaciones nocivas en su

estructura corporal, sea fisonómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo de la persona que deje huella temporal o permanente y cause dolor o sufrimiento graves.

Así las cosas y en atención al caso que nos ocupa, en fecha 23 de abril de 2010, la señora N1 presentó queja ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra de elementos de la Policía Ministerial del Estado, por haber afectado la integridad física a su esposo N2 durante el tiempo en que estuvo detenido, argumentando que éste fue vendado de los ojos y golpeado, al grado de que al día de la presentación de la queja todavía contaba con huellas de violencia, tanto en sus piernas como en el resto de su cuerpo.

En atención a dicha queja, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos solicitó un informe al Comandante de la Policía Ministerial del Estado con base en Mazatlán, Sinaloa, lo anterior como autoridad señalada como responsable, el cual fue omiso en rendirlo.

De igual forma se solicitó un informe al titular de la Agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en Homicidio Doloso con sede en Mazatlán, Sinaloa y al Coordinador General de la Unidad Modelo de Investigación Policial, ambos también como autoridades presuntas responsables; además se solicitó informe en vía de colaboración al Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, quien remitió copias certificadas de las diligencias de la averiguación previa número MAZTL/***/***/****, de cuyo análisis se desprende lo siguiente:

El 18 de abril de 2010, a las 01:00 horas, el representante social integrador recibió el oficio número 1651/2010 (según se observa en la leyenda que obra al margen superior derecho del citado oficio), por medio del cual el señor N10, Comandante de la Policía Ministerial del Estado con base en Mazatlán, Sinaloa, puso a disposición en calidad de presentados al agraviado y a otra y remitió parte

informativo suscrito por los agentes N9 y N6, ambos agentes de la Policía Ministerial del Estado, quienes narraron que encontrándose realizando una investigación de los hechos, una vez que se entrevistaron con la madre del menor occiso (N8) y con el agraviado N2, determinaron detenerlos y presentarlos ante el representante social a fin de que se les recepcionara su declaración ministerial.

Debe precisarse que al ponerlos a disposición les fue practicado un examen clínico por parte del médico adscrito a la Policía Ministerial del Estado, quien concluyó que el agraviado presentaba escoriaciones dermoepidérmicas sobre región lumbar izquierda, en tercio medio de su cara posterior del antebrazo derecho y sobre las muñecas de ambos antebrazos, examen practicado a las 22:30 del 17 de abril de 2010.

También se advierte que el 17 de abril de 2010, aproximadamente a las 19:00 horas, los agentes N3 y N4, ambos adscritos a la Unidad Modelo de Investigación Policial, se entrevistaron con el agraviado N2 y otra, lo anterior una vez que tuvieron conocimiento que éstos se encontraban en las celdas de la Policía Ministerial del Estado de Mazatlán, personas que narraron a los agentes la forma en cómo presuntamente sucedieron los hechos que investigaban.

El agraviado rindió su declaración ministerial a las 04:10 horas del 18 de abril de 2010 y a las 06:10 horas, el representante social dio fe, inspección y descripción ministerial de que en esos momentos se retiraron de la agencia ministerial el agraviado y la madre del menor occiso.

Finalmente el 18 de abril de 2010, el Coordinador General de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa puso a disposición del representante social del fuero común Especializado en Homicidio Doloso de Mazatlán, Sinaloa, en calidad de detenidos al agraviado y a la madre del menor occiso, manteniéndolos en las celdas de la

Policía Ministerial, quien señaló que fueron detenidos a las 08:50 horas del mismo día, según informe policial que anexó, el cual firman los agentes N3 y N4, ambos adscritos a la Unidad Modelo de Investigación Policial y los agentes N5 y N6, agentes de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la base de Mazatlán, Sinaloa.

Al respecto debe señalarse que si bien es cierto no se especifica la hora exacta en que el agraviado fue detenido por agentes de la Policía Ministerial del Estado, lo cierto es que a las 19:00 horas del 17 de abril de 2010 ya se encontraba interno en las celdas de la base de Mazatlán, Sinaloa, de la citada corporación policiaca, ya que a esa hora se advierte que fue entrevistado por los agentes de la Unidad Modelo de Investigación Policial, además el médico adscrito a la Policía Ministerial lo revisó a las 22:30 horas del mismo día y le encontró lesiones del tipo de excoriaciones dermoepidérmicas en la espalda lumbar izquierda, en el antebrazo derecho y en ambas muñecas, siendo finalmente presentado ante el Ministerio Público a las 01:00 horas del 18 de abril de 2010.

Posteriormente fue dejado en libertad y detenido de nueva cuenta a las 08:50 horas del 18 de abril de 2010, por los CC. N3 y N4, ambos agentes de la Unidad Modelo de Investigación Policial en la Zona Sur, en coordinación con los CC. N5 y N6, ambos agentes de la Policía Ministerial de Estado adscritos a la base de Mazatlán, Sinaloa, dejándolo a disposición de la representación social en las celdas de la base de la corporación policiaca citada en último término.

En ese lugar permaneció detenido hasta que el 20 de abril de 2010, cuando fue trasladado al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, lugar en el que a las 02:25 horas fue revisado por el médico de guardia adscrito a dicho Centro, quien dictaminó que presentaba hipoacusia en el oído derecho, con el conducto auditivo con zonas hemorrágicas y edematizado, al igual que el pabellón auricular.

Dicha revisión médica arrojó además que presentaba pequeñas excoriaciones en mano derecha y además de múltiples excoriaciones dérmicas imperliginizadas en muslo derecho.

Lo anterior fue corroborado por personal de este organismo, pues al entrevistarse con éste, le fueron tomadas fotografías, en donde se muestran lesiones en el dorso de ambas manos, en región lumbar izquierda de la espalda y en la cara externa del muslo derecho, las cuales son del tipo de excoriaciones en forma de puntillero hemorrágico, en proceso de costrificación.

Ahora bien, según se desprende del informe rendido a esta CEDH por parte del Coordinador General de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, los agentes que participaron en el traslado del agraviado hasta su internación en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, lo fueron precisamente los CC. N3 y N4, ambos agentes de la Unidad Modelo de Investigación Policial en la Zona Sur.

Aunado a esto, de la narración de hechos de los informes policiales rendidos a la representación social por parte de los mencionados agentes policiacos, no se desprende circunstancia alguna que deduzca o haga suponer que las lesiones que presentó el señor N2 se hayan ocasionado por causas certeras.

En esta tesitura, los agentes de la Policía Ministerial del Estado de la base de Mazatlán, Sinaloa y los agentes de la Unidad Modelo de Investigación Policial adscritos a la Zona Sur, transgredieron el derecho del señor N2 a la integridad y seguridad personal.

Dicho derecho humano se encuentra reconocido y protegido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales al respecto señalan lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 19.

“...Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades...”

Asimismo, dichos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley transgredieron instrumentos internacionales celebrados y ratificados por nuestro país en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los que destacan:

Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

“Artículo I.

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

De igual manera los agentes de la Policía Ministerial del Estado de la base de Mazatlán, Sinaloa, y los agentes de la Unidad Modelo de Investigación Policial adscritos a la Zona Sur, transgredieron diversa reglamentación de carácter local, dentro de las que encontramos:

Constitución Política del Estado de Sinaloa:

“Artículo 1.

El Estado de Sinaloa, como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye en un Estado democrático de derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes.”

Artículo 4 Bis.

En el Estado de Sinaloa toda persona es titular de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución, así como en los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano.

.....

Artículo 73.

La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución les señala.

La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos...

“...Las instituciones encargadas de la seguridad pública regirán su actuación por los principios de legalidad, protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.”

Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa:

“Artículo 31.

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución Local...

.....

...IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;

.....

XXXI. Utilizar la fuerza física en forma racional, oportuna y proporcional en el desempeño de sus funciones y...”

.....

Así, de los ordenamientos legales invocados, los actos de los funcionarios públicos fue por demás obvia incumpliendo con la tarea que de manera exclusiva se le confiere.

Por otro lado, el hecho de que los actos o hechos hayan sido imputados a servidores públicos, hace potenciar su grado de afectación, ya que deviene de quien en principio es responsable de velar por la dignidad y justicia de todo individuo.

De las constancias que integran el referido expediente que ahora se resuelve, este organismo pudo acreditar violaciones a derechos humanos, consistentes en una indebida prestación del servicio derivado de los elementos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado y de la Unidad Modelo de Investigación Policial que participaron en la presentación y detención del señor N2.

Entendiéndose ésta como cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o deficiencia de un servicio público de parte de un servidor público que implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

En ese contexto, a juicio de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los supuestos mencionados en el párrafo precedente se encuentran plenamente satisfechos en el caso en estudio.

A lo anterior se le abona que del cúmulo de evidencias con que cuenta esta Comisión se advierte que el 18 de abril de 2010, a la 01:00 horas, el representante social integrador recibió el oficio número 1651/2010 (según se observa en la leyenda que obra al margen superior derecho del citado oficio), por medio del cual el señor N10, Comandante de la Policía Ministerial del Estado de la base de Mazatlán, Sinaloa, puso a disposición en calidad de presentados al agraviado y a otra.

A su vez, mediante ese oficio remitió parte informativo suscrito por los agentes N9 y N6, ambos agentes de la Policía Ministerial del Estado, quienes narraron que encontrándose realizando una investigación de los hechos, una vez que se entrevistaron con la madre del menor occiso (N8) y con el agraviado N2,

determinaron detenerlos y presentarlos ante el representante social a fin de que se les recepcionara su declaración ministerial.

Si bien es cierto, del parte informativo no se desprende con claridad la hora en que el agraviado fue detenido, también se advierte que el 17 de abril de 2010, aproximadamente a las 19:00 horas, ya se encontraba detenido en las celdas de la base de Mazatlán, Sinaloa, de la Policía Ministerial del Estado, pues los agentes N3 y N4, ambos adscritos a la Unidad Modelo de Investigación Policial, al rendir su informe policial de 17 de abril de 2010, refirieron haberse entrevistado con éste a esa hora, una vez que tuvieron conocimiento que se encontraba detenido en dicho lugar; de igual forma fue revisado por el médico adscrito a la Policía Ministerial del Estado a las 22:30 horas.

Por lo tanto, si tomamos en cuenta que por lo menos a las 19:00 horas del 17 de abril de 2010 el agraviado ya se encontraba detenido en las celdas de la Policía Ministerial del Estado y fue puesto a disposición del Ministerio Público a las 01:00 horas del 18 de abril de 2010, se acredita que el Comandante de la Policía Ministerial del Estado, N10 y los agentes N11 y N6, Comandante “E” e Investigador, respectivamente, de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la base de Mazatlán, Sinaloa, tardaron aproximadamente seis horas en poner a disposición del Ministerio Público al señor N2, tiempo en el que permaneció detenido en una celda de la citada corporación policiaca.

Más grave aún resulta lo anterior, si tomamos en cuenta que éste fue puesto a disposición del representante social en calidad de “presentado” y la decisión de presentarlo, fue tomada de manera espontánea por dichos agentes investigadores con la anuencia del comandante de la base policiaca, pues no mediaba ninguna orden ministerial que se hubiere girado para tal efecto.

Lo anterior nos permite considerar que el agraviado no fue puesto inmediatamente a disposición de la autoridad competente, violentando con ello

lo establecido en el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como lo dispuesto en el principio 37 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, cuyos textos legales de manera textual, establecen lo siguiente:

“Artículo 16 párrafo quinto de la Constitución Federal:

.....

“Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo a disposición de la autoridad de la autoridad más cercana y ésta con la prontitud, a la del Ministerio Público”.

Principio 37 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión:

“Principio 37. Toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por ley. Esa autoridad decidirá sin dilación si la detención es lícita y necesaria. Nadie podrá ser mantenido en detención en espera de la instrucción o el juicio salvo en virtud de orden escrita de dicha autoridad.

Toda persona detenida, al comparecer ante esa autoridad, tendrá derecho a hacer una declaración acerca del trato que haya recibido durante su detención.”

Asimismo con tal conducta también se trastocó por parte de los servidores públicos de la Policía Ministerial del Estado lo dispuesto por el artículo 116 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, que a continuación se transcribe:

“Artículo 116.

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.”

De la misma manera es importante mencionar que los hechos aquí descritos y que a su vez violaron los derechos humanos de libertad personal, de legalidad y de seguridad jurídica en agravio del señor N2, transgredieron también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento internacional ratificado por México, particularmente, los artículos 2.1 y 9º, inciso 3) que de manera textual señalan:

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

“Artículo 2.1.

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 9 inciso 3).

Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad

podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.”

Luego entonces, al acreditarse el anómalo proceder de la autoridad, ya sea por una deficiencia o un exceso de las facultades legales que le son conferidas automáticamente, se actualiza la indebida prestación del servicio por parte de dichas autoridades, incumpliendo con ello con los principios de legalidad, honradez, lealtad, eficiencia y profesionalismo que como servidores públicos están obligados a cumplir, conforme lo establecen los artículos 108; 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, señalan:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

.....

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.”

Con tales acciones se vulnera el derecho y principio de seguridad jurídica que debe legitimar con su actuar toda autoridad y se hace necesario el requerimiento a esa Procuraduría para que exhorte y advierta a sus funcionarios públicos de las responsabilidades que pueden derivarse del desacato a los requerimientos de informes y documentación que les realice esta CEDH.

A ese respecto, la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, en su numeral 39, faculta a este órgano de Estado a solicitar informes a las autoridades sobre los actos u omisiones que se les atribuyen en la queja, para efecto de estar en posibilidad de tener la versión de ambas partes en conflicto (quejoso y autoridad señalada como responsable) y una vez allegados de las evidencias y probanzas correspondientes lograr una resolución a la queja planteada.

Es el artículo 40 de la citada ley, la que obliga a toda dependencia y autoridades del Estado y los municipios a proporcionar veraz y oportunamente la información y documentación que solicite este órgano de control, advirtiéndose que ante el desacato habrá lugar a las responsabilidades correspondientes.

Del análisis de estos numerales se advierte que el Comandante de la Policía Ministerial del Estado en Mazatlán N10, actualizó con su conducta las hipótesis contenidas en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la CEDH Sinaloa al no proporcionar oportunamente la información y documentación requerida.

En atención a lo planteado, esta CEDH exhorta a esa Procuraduría de Justicia Estatal a efecto de derivar las responsabilidades correspondientes por desacato a la norma y actualización de la hipótesis del artículo 40 de la Ley Orgánica de la CEDH perpetrada por el citado servidor público y se impongan las sanciones que conforme a derecho corresponden.

En ese sentido, el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los servidores públicos al ejercer indebidamente sus atribuciones pueden incurrir en responsabilidad política, penal o administrativa.

Dicho numeral también establece los procedimientos a seguir sobre tales responsabilidades y dice que pueden desarrollarse en forma independiente, con la salvedad de que no podrán imponerse sanciones de la misma naturaleza cuando la conducta anómala actualice consecuencias de esa índole en diferentes cuerpos normativos.

Es decir, el solicitar a las autoridades involucradas el inicio de un procedimiento administrativo en contra de servidores públicos a quienes se les considera han incumplido en actos u omisiones, es independiente y autónomo del político, del penal y del civil a que pudiera dar lugar una sola conducta ilícita cometida por un servidor público debido a que la naturaleza de la responsabilidad administrativa tiene como objetivo preservar el correcto y eficiente servicio público, que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Legalidad que le exige cumplir con la finalidad del Estado de Sinaloa que no es otra más que la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, mismos que en el caso que nos ocupa desatendió al obstaculizar la investigación materia de derechos humanos.

En razón de lo anterior, a fin de promover conductas que redunden en una mejor protección de los derechos humanos, para dar una solución a la problemática que se estudia y con el propósito de evitar que las prácticas anómalas señaladas en el cuerpo del presente, no se continúen llevando a cabo por los elementos de la Policía Ministerial del Estado y de la Unidad Modelo de Investigación Policial y con ello se vulneren los derechos humanos de los gobernados, esta Comisión se

permite formular a esa Procuraduría de su cargo el Acuerdo de Conciliación que en párrafos subsecuentes se señala.

De conformidad con lo estatuido por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 Bis de la Constitución Política del Estado; 7º, fracción VIII y 43 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 85, 86, 87, 88 y 89 de su Reglamento Interno, este organismo formula a usted, señor Procurador General de Justicia del Estado, el siguiente:

ACUERDO DE CONCILIACIÓN

PRIMERO. Instruya a la Unidad de Contraloría Interna de esa Procuraduría General de Justicia del Estado, para que al considerar los actos motivo de la queja así como los razonamientos expuestos por esta Comisión, dé inicio y trámite al procedimiento administrativo correspondiente de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, a fin de que se impongan las sanciones que resulten procedentes en contra de los agentes N3 y N4, ambos pertenecientes a la Unidad Modelo de Investigación Policial de la Procuraduría General de Justicia; los agentes N5, N6 y los comandantes N9 y N10, todos adscritos a la Policía Ministerial del Estado y demás que resulten responsables.

SEGUNDO. Instruya a los elementos de la Policía Ministerial del Estado para que en lo sucesivo cuando lleven a cabo la detención de cualquier persona se ponga de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente.

TERCERO. Se instruya a los Comandantes de la Policía Ministerial del Estado, sobre la obligación que les marca la norma jurídica de responder de manera

veraz y oportuna a las solicitudes de informe que les realice esta CEDH, y se les advierta de la generación de las responsabilidades subsecuentes.

CUARTO. Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que personal de la Unidad Modelo de Investigación Policial y de la Policía Ministerial del Estado, sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deben observar a fin de respetar los derechos humanos de las personas en el desempeño de sus funciones.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica y el Reglamento Interior de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, usted cuenta con un plazo máximo de cinco días para responder al presente Acuerdo de Conciliación, así como para enviar las pruebas correspondientes en caso de que el mismo sea aceptado.

De aceptarse el Acuerdo de Conciliación y durante los cinco días hábiles siguientes esa Procuraduría General de Justicia del Estado no cumple totalmente con lo establecido en el mismo, la señora N1, podrá hacerlo del conocimiento de este organismo, para que dentro de las setenta y dos horas siguientes el expediente del caso se reabra y determinar las acciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De no aceptarse dicho Acuerdo, la consecuencia inmediata será la preparación del proyecto de recomendación correspondiente, tal y como lo establece el numerario 88, del citado ordenamiento legal.

Dada la naturaleza jurídica del presente Acuerdo de Conciliación, de conformidad con lo estatuido por el artículo 87 del Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuenta con un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día siguiente de aquél en que se haga la

notificación respectiva, para que manifieste a esta CEDH si acepta el Acuerdo de Conciliación, solicitándosele expresamente que en caso de que no la acepte, motive y fundamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por este organismo estatal carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución, lo mismo la General de la República que la del Estado así como las leyes emanadas de una y de otra.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
Culiacán Rosales, Sin., a 7 de mayo de 2012
El Presidente

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO

C.c.p. Sra. N1. Quejosa. Para su conocimiento.
C.c.p. Expediente.
C.c.p. Minutario.